



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.**

---

Bogotá D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019)

<b>RADICADO:</b>	<b>11001-33-35-026-2019-00105-00</b>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>SILVIA CRISNELY MEDINA RODRÍGUEZ</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA- CASUR</b>

En el presente asunto, **SILVIA CRISNELY MEDINA RODRÍGUEZ**, promueve demanda en contra de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA-CASUR**, con la finalidad de que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual no se le reconoció sustitución pensional, en ocasión al fallecimiento del señor Adolfo Chisino.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, este Despacho observa que en este momento, no es posible dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

**“Artículo 162 Contenido de la Demanda.** Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. **Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.**
4. **Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.**
5. **La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.**
6. **La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.**

**7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”**

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Dicho precepto debe entenderse concordante con el art. 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

### **1. Del derecho de postulación**

El Capítulo I de este ordenamiento, consagra lo aspectos relativos a la capacidad, representación y ejercicio del derecho de postulación, sobre este último aspecto el artículo 160 dispuso:

*“Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.*

*Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.”*

Ahora bien, como quiera que el C.P.A.C.A., no consagra lo relativo a la formalidad que deben cumplir los poderes que se presenten ante esta jurisdicción, se hace necesario acudir a la Ley 1564 de 2012 para estudiar este derrotero, ello en aplicación de la remisión que consagra el art. 306 de la Ley 1437 de 2011 al Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.

En tal virtud, el artículo 74 del C.G.P., en materia de otorgamiento de poder a los profesionales del derecho para actuar en procesos judiciales, estableció:

*“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. **En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.***  
*(...)”*

Pues bien, analizado el poder allegado por el apoderado judicial de la actora, tiene el Despacho, que el objeto para el cual fue conferido no está claramente identificado. Lo anterior, en razón a que 1) no se identifica la autoridad frente a la cual se confiere poder, 2) no se especifica el medio de control a incoar, 3) no se identifica las partes o extremos de la demanda, 4) no se identifica el acto

administrativo objeto de demanda, y 5) no se preceptúa las pretensiones a seguir dentro del curso de la demanda.

Aunado a ello, la documental aportada obedece a una copia del poder especial. Razón por la cual, el Profesional del Derecho, deberá reformular y presentar original de poder especial para actuar dentro del presente proceso; poder en el que se determine claramente el objeto para el cual fue conferido, y que guarde concordancia con lo preceptuado en el escrito de demanda.

## **2. De los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones**

El artículo 162 del C.P.A.C.A. establece lo concerniente a los requisitos que deben reunir las demandas, refiriéndose en su numeral 3° a los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, preceptuando lo siguiente:

*“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (...)*

**3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.**  
*(...)”*

Pues bien, analizado el escrito de demanda, encuentra el Despacho que, si bien se estableció un acápite de hechos, lo allí descrito no es claro, toda vez que no se describen las situaciones fácticas y jurídicas que dieron inicio a la controversia suscitada por la actora.

Aunado a lo anterior, los hechos descritos, fueron planteados de tal manera que pareciesen narrar conversaciones y acciones de la demandante con sujetos no identificados en el escrito de demanda.

Dentro de los hechos, tampoco se hace alusión al acto administrativo objeto de recurso, o a los efectos jurídicos que este creó, modificó o extinguió.

Por lo anterior, se conmina al Profesional en Derecho, a la modificación y restructuración de los hechos a fin de contextualizar el objeto de la litis, para que así el Despacho cuente con la totalidad de presupuestos facticos que soporten todas y cada una de las pretensiones de la parte actora. Así mismo, lo establecido en el escrito de demanda bajo el acápite de “tramite gubernamental”, debe ser incluido dentro del acápite de hechos.

## **3. De los fundamentos de derecho de las pretensiones.**

El artículo 162 del C.P.A.C.A. establece lo concerniente a los requisitos que deben reunir las demandas, refiriéndose en su numeral 4° a los fundamentos de derecho de las pretensiones, preceptuando lo siguiente:

*“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (...)*

**4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.**

Analizado el expediente, encuentra el Despacho que, dentro del escrito de demanda, si bien se incluyó acápite de “fundamentos de derecho”, en este se no se plasman o desarrollan en debida forma, los fundamentos de derecho de las pretensiones, toda vez que no se indican las normas violadas por la actuación de la administración, y no se plantea el concepto mismo de la violación acaecida.

Por tanto, la parte actora, deberá plasmar dentro de la demanda, acápite en el que se desarrollen tanto las normas violadas por la administración, así como la normativa en que sustenta la presentación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior, en concordancia con las disposiciones Consejo de Estado, en las que establece que cuando la demanda que tiene por objeto el estudio de legalidad de un acto administrativo, **debe contener un capítulo especial en el que se señalen las normas violadas y se explique el concepto de su violación.** Este último requisito es consecuencia del carácter de rogada de la justicia contenciosa, que le impide al juez realizar un estudio de legalidad con normas no invocadas en la demanda, pues las expresiones “fundamentos de derechos que se invocan como vulnerados” y “concepto de violación”, constituyen el marco dentro del cual puede y debe moverse el juez administrativo para desatar la controversia.

#### **4. De las pruebas que se pretende hacer valer**

El artículo 162 del C.P.A.C.A. establece lo concerniente a los requisitos que deben reunir las demandas, refiriéndose en su numeral 5º a las pruebas que se pretendan hacer valer, preceptuando lo siguiente:

***“Artículo 162 Contenido de la Demanda.** Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (...)*

***5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.***

Pues bien, una vez revisado el escrito de demanda y sus anexos, encuentra el Despacho, que existen incongruencias entre las documentales relacionadas en el escrito de demanda y las aportadas como anexos.

Aunado a ello, al acto administrativo acusado o perseguido dentro de la demanda, difiere del aportado; ya que, mientras que en el escrito de demanda se hace referencia a la resolución No. 3900 del 27 de julio de 2018, en el acápite de pruebas y anexos, se relaciona y aporta la resolución No. 399 del 8 de febrero de 2018.

Razón por la cual, el apoderado judicial deberá identificar claramente todas y cada una de las documentales que pretenda hacer valer dentro del presente medio de control. Así mismo, deberá identificar claramente el acto administrativo atacado con la presente demanda, y aportarlo en físico como anexo de la demanda.

#### **5. De la estimación razonada de la cuantía**

El artículo 162 del C.P.A.C.A. establece lo concerniente a los requisitos que deben reunir las demandas, refiriéndose en su numeral 6° a la estimación razonada de la cuantía, preceptuando lo siguiente:

**“Artículo 162 Contenido de la Demanda.** Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (...)

**6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.(...)”**

Pues bien, analizado el expediente, encuentra el Despacho que dentro del escrito de demanda no se estipuló lo concerniente a la estimación razonada de la cuantía, toda vez que no se vislumbra acápite en el que se desarrolle o convenga lo concerniente a las aspiraciones económicas del demandante.

Frente a este punto, recuerda el Despacho, que mediante providencia del 20 de abril de 2015, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2014-02729-01, el Consejo de Estado se pronunció en torno a la aplicación de las reglas de competencia definidas frente al presupuesto procesal de la cuantía, ratificando que es deber del juez verificar dicho elemento al momento de admitir la demanda, señalando que son aplicables de manera preferente las disposiciones jurídicas que frente a esta materia contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, al momento de estimar las aspiraciones económicas, el apoderado judicial de la parte actora, deberá tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, en el que se señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia; refiriéndose en el numeral 2° específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

**“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Así mismo, la estimación de la cuantía a realizar deberá estar acorde a lo preceptuado en el 157 del C.P.A.C.A., el que para el efecto establece:

**“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA.** <Ver Notas de Vigencia> Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.*

***En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.***

***La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.***

***Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”***

Del precitado artículo, se concluye que la cuantía deberá calcularse **desde cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda sin que supere los tres años, y sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

## **6. De la dirección de notificaciones judiciales**

De conformidad con el numeral 7° del artículo 162 del C.P.A.C.A., la demanda debe contener “*El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.*”.

Por tal razón, la parte actora deberá indicar el lugar y la dirección en donde la demandante, directa y efectivamente, podrá recibir notificaciones, sin que pueda ser la misma del apoderado.

Así las cosas, y en virtud de las consideraciones anteriores, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora, no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, 1450 del 2011 y 1564 del 2012, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa. **En pocas palabras, el profesional del derecho deberá allegar un nuevo escrito de demanda con las respectivas subsanaciones señaladas en el este proveído, respetando el orden que establece el artículo antes mencionado.**

Por lo expuesto, el Despacho,

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA** promovida por **SILVIA CRISNELY MEDINA RODRÍGUEZ**, en contra de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA- CASUR**

**SEGUNDO.-** Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos

señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.



Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**

Juez

CA

<div></div> <div><p><b>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD</b></p><p><b>CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.</b></p><p>Por anotación en <b>ESTADO ELECTRÓNICO</b> notifico a las partes la providencia anterior hoy <b>30 DE ABRIL DE 2019</b>, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)</p><div></div><p><b>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA</b></p><p><b>SECRETARIA</b></p></div>
--

